

una referencia de primer orden en la investigación inédita que ofrecemos a los lectores.

Además del ensayo principal, el lector podrá encontrar en este número la culminación de la sugerente reflexión que sobre la obra de Jesús Martín Barbero, ha realizado el profesor Samuel Martínez. Su lectura permite conocer la propuesta teórica de uno de los más acreditados especialistas de habla española en el campo de la comunicación.

Congruentes con el propósito de estimular la producción y difusión científica de los alumnos del posgrado, la RIC se enriquece en esta ocasión con la colaboración de Jorge Rojas, que nos propone una interesante aproximación a la fotografía como expresión temporal de la opinión pública en el texto denominado "La metáfora fotografía-encuesta, mito y realidad de la opinión pública".

Para el programa de posgrado es muy alentador recibir la colaboración de Juan Magariños de Morentin, a través de una "Guía elemental para un proyecto de investigación semiótica". Este material seguramente se convertirá en un recurso de primera mano y en una referencia clave para los estudiantes de licenciatura y posgrado interesados en los temas que ofrece el campo abierto de los procesos de significación y otorgamiento de sentido.

Finalmente, el número se completa con el texto "Medios y poder judicial" en el que se analizan los problemas derivados del ejercicio del derecho a la información en relación con uno de los más opacos poderes del Estado mexicano, como lo es el poder judicial.

Informamos a nuestros lectores que la Revista Iberoamericana de Comunicación ya puede consultarse en su versión electrónica abreviada en la dirección <<<http://www.uia.mx/ibero/noticias/publica/comunicacion/default.html>>>. Para quienes participamos en la hechura y promoción de la RIC este acontecimiento es muy estimulante, porque permitirá que nuestro esfuerzo llegue a un mayor número de lectores.

Medios y poder judicial: relaciones y agenda de reformas

Juan Francisco Escobedo

A lo largo de este artículo el autor nos ayuda a ver la interrelación que se da entre los medios de comunicación y el poder judicial. Ambos, medios y poder judicial están viviendo sus propias transiciones; pero la de los medios es más rápida y en consecuencia incide de manera más decisiva en el desempeño de los poderes públicos. El autor muestra como, paradójicamente, el impulso aperturista hubiese encontrado eco en el poder ejecutivo federal y poco compromiso en los poderes legislativo y judicial. Aquí se sostiene de manera enérgica que ni el poder judicial ni los medios de comunicación pue-



den seguir siendo tribu-
gitimidad del régimen
levancia que las refor-
solamente en el ámbito
el ámbito local de los
Palabras clave: Esta-
judicial, Ley Federal
ceso a la Información
der ejecutivo federal.

tarios de las necesidades de le-
político. Y que es de especial re-
mas a la ley estén incluidas no
federal; sino también en
estados.
do de Derecho, poder
de Transparencia y Ac-
Pública, reforma, po-

La vieja expresión: "los jueces hablan por sus sentencias", referida como mecanismo de defensa para eludir las exigencias de justicia, apertura, publicidad y acceso a la información dirigidas al poder judicial, es insostenible por la carga de anacronismo y arrogancia que contiene. En el contexto del funcionamiento normal en un Estado de Derecho, tal expresión, condensaría y acreditaría el papel de los jueces. Pero aún no es el caso en México.

En perspectiva histórica es importante situar el papel instrumental del poder judicial, dirigido a contribuir de manera subordinada a la legitimación y persistencia del régimen político autoritario. La aplicación e interpretación del derecho, habitualmente tributarias de los intereses políticos y económicos proijados por el autoritarismo y toda la trama de impunidad, complicidad y arbitrariedad que se articularon de manera prodigiosa y eficaz en México durante décadas, en algunos casos se ha debilitado, en otros han cambiado los protagonistas; pero no se ha extinguido.

El tema es antiguo, las mutaciones del poder judicial son recientes y los resultados aún son exigüos. La reforma judicial más relevante operada desde los años de la República Restaurada en el siglo XIX, apenas cumplirá diez años. Hubo un tiempo en el que un pasante de derecho fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y un general de división aspiró a presidirla.

El poder judicial mexicano no dispone de una agenda suficientemente clara y comprometida con el proceso de democratización

y reforma institucional del país. Y al mismo tiempo tiene dificultades para responder con prestancia ante la creciente observación y crítica de importantes segmentos y actores de la sociedad, entre los que se encuentran los medios. En este punto es donde se activan las relaciones entre los me-



dios y el poder judicial. Ambos, medios y poder judicial están viviendo sus propias transiciones; pero con una notable diferencia: la transición de los medios es más rápida y en consecuencia incide de manera más decisiva en el desempeño de los poderes públicos, en especial sobre aquellos, que como el poder legislativo y el poder judicial federales no han mostrado un claro compromiso con la apertura.

El cambio en y de los poderes del Estado suele ser más lento que el cambio en la sociedad. Los medios y el ejercicio del periodismo en México, están cambiando más rápidamente que el poder público y las elites políticas.

El poder judicial como poder de Estado ha sido y es aún un poder criptocrático. Son atendibles las reformas iniciadas hace una década en el marco del predominio de un solo partido. Pero en el contexto del proceso de democratización; lo que hasta ahora se ha realizado en ese campo es insuficiente. Hasta ahora sigue siendo evidente que por impulso interior, el poder judicial no se reformará lo suficiente. La endogamia es un poderoso ácido que corroe toda tentativa de cambio institucional; incluso la que podría deri-



varse del ejercicio de la prerrogativa constitucional para iniciar leyes en el campo judicial, si la reforma constitucional en curso se aprueba.

Es preciso que el tema de la reforma y apertura de las instituciones responsables de impartir justicia se convierta en un tema central de la agenda pública. Y se ensamble con las exigencias no menos importantes para reformar el obsoleto modelo de procuración de justicia.

En los tiempos que corren, algunos "leviatanes privados" son más poderosos que los poderes públicos y dominan territorios importantes de la trama social y de la geografía nacional. Pero la restauración del poder y la rehechura institucional del país no deben sucumbir ante la magnitud de sus enemigos sistémicos.

Nunca serán suficientes las exigencias para reformar las instituciones públicas. El cambio institucional es creciente, pero en el ámbito judicial hay demasiado déficit acumulado para dejar que esto ocurra de manera natural. El ejemplo más reciente tiene que ver con la respuesta decepcionante de la Suprema Corte de Justicia

para cumplir con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como representante del Grupo Oaxaca, junto con Jorge Islas, en la mesa de negociación que se integró en la Cámara de Diputados para acercar la propuesta ciudadana y la propuesta del ejecutivo; estoy en condicio-



nes de afirmar que nos equivocamos al aceptar que en el dictamen aprobado que dio origen a la ley vigente en la materia, se estableciera la potestad del poder judicial para establecer sus propias reglas internas en materia de transparencia y acceso a la información, por un lado. Y, por el otro, en reconocer el error del legislador al establecer de manera poco precisa, la reserva de las averiguaciones previas y los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado.

Las limitaciones de la ley en esta materia deben corregirse. Nos excedimos en la confianza sobre la posibilidad de que los ministros asumieran por sí solos, los principios y parámetros que en materia de apertura del poder judicial se han aplicado en las sociedades democráticas.

Es paradójico que en una primera etapa, el impulso aperturista hubiese encontrado eco en el poder ejecutivo federal y escaso compromiso en los poderes legislativo y judicial.

La búsqueda y preservación del consenso, el imperativo de crear una ley de ese tipo y el poderoso desafío que representaba la presidencia imperial y su extenso aparato burocrático, nos distrajeron de la necesidad de empujar más por la apertura del poder judicial. Pero la estructura de oportunidades para hacerlo no se ha cerrado.

La perspectiva para desahogar la agenda integral de la apertura y reforma institucional del poder judicial es dual. Tiene que ver con el derecho humano a la información; pero también tiene ver con la recuperación del carácter público del ejercicio de las funciones judiciales, con los imperativos constitucionales para garantizar el carácter público de los juicios, así como con la naturaleza "debida" en términos de legalidad de los procesos jurisdiccionales.

El ejercicio de la función pública judicial, así como el funcionamiento de los órganos e instancias diversas del poder judicial constituyen asuntos de interés público. Y, en esa medida, son y deben ser objeto de la observación y seguimiento de parte de los medios.

16



La existencia y despliegue del Estado en cualquiera de sus manifestaciones y modalidades sigue siendo la temática central del periodismo contemporáneo. Medios y poder público articulan una relación inexcusable, que en la perspectiva de un régimen autoritario tomó un sesgo y se desarrolló bajo una lógica que ya no tienen razón de ser.

Ni el poder judicial ni los medios de comunicación pueden seguir siendo tributarios de las necesidades de legitimidad del régimen político. En todo caso, debe plantearse un nuevo esquema de relaciones, marcado por el horizonte de la democracia y de la reforma institucional del país; como condiciones necesarias, aunque no suficientes para reorientar las bases y los objetivos del desarrollo económico y del progreso social.

La perspectiva dual para acometer la apertura, también exige una perspectiva integrada para incorporar simultáneamente en la agenda, los temas de la reforma del modelo para procurar la justicia, así como del modelo para impartirla. La agenda de temas que implica un proceso de esta envergadura es un asunto de alto interés público y por lo tanto, también un asunto de los medios.

Por otra parte, se han hecho evidentes algunas restricciones legales e institucionales que prevalecen e impiden que los medios y los periodistas cumplan con su compromiso con el derecho a saber de la sociedad acerca de la "cosa pública".

Como las que tienen que ver con las disposiciones vigentes en los códigos de procedimientos penales que facultan a los jueces a citar a los periodistas para declarar y reve-



17

lar sus fuentes. En este punto es imperativo legislar para que proteja el secreto profesional de los periodistas. El Congreso del Estado de Morelos ha puesto el ejemplo al reconocer tal derecho en la Constitución local.

En las regiones existen restricciones como las que propician algunas leyes locales de acceso a la información, que impiden el acceso a la expedientes judiciales y a la información relacionada con los procedimientos jurisdiccionales, cualesquiera sea el estado que guarden; como es el caso de las leyes de Durango, San Luis Potosí y Jalisco, respectivamente. Destaco también los estados que han dado pasos en la dirección adecuada en materia de apertura judicial, como es el caso de Morelos, Colima y Querétaro.

En apretada síntesis concluyo que las variables a tener en cuenta para la formulación de una agenda integrada en materia de apertura y reforma institucional en relación con la temática de la presente conferencia, son las siguientes:

1.- En relación con los enfoques es preciso considerar las siguientes vertientes:

a) El derecho a la información, tanto en la modalidad de derecho de todas las personas a conocer la información pública en posesión de los poderes del Estado; como del derecho a saber que



se nutre de la libertad de información, principalmente la que ejercen los medios y los periodistas.

b) Los imperativos constitucionales que establecen el carácter público de los juicios y la naturaleza legal debida de los procedimientos, así como el carácter público de todas las funciones del Estado.

2.- En relación con los ámbitos institucionales que deben reformarse es necesario considerar en perspectiva sistémica los siguientes:

a) Las instituciones, funciones, procedimientos y reglas del aparato judicial, y

b) las instituciones, funciones, procedimientos y reglas del aparato de procuración de justicia.

3.- En relación con la frecuencia en las que debe desplegarse la discusión pública y las agendas específicas de reforma institucionales, es conveniente considerar:

a) La dimensión y carácter federal de los poderes del Estado, y

b) la dimensión y el carácter local de los poderes públicos.

Cuando este país, siendo formalmente una República Federal funcionaba como un Estado unitario, los temas y el sentido de las reformas legales se definía en *Los Pinos*. Hoy, que observamos los intentos por res-



taurar el carácter federal de la República, sin perder la perspectiva del Estado nación, es posible afirmar que las deliberaciones son múltiples, los procesos para llegar a acuerdos son más lentos y difíciles, pero no por ello, menos improbables.

Después de todo se trata de atenuar el carácter patrimonialista de la procuración e impartición de justicia. Y por el lado de los medios y los periodistas, acotar las relaciones tributarias y las relaciones no legales con los poderes públicos y las elites del poder.

20



La metáfora fotografía-encuesta: mito y realidad de la opinión pública

Jorge O. Rojas Prieto

A lo largo de este trabajo el autor nos presenta de manera crítica y abierta, cómo mediante la selección de la fotografía y su proceso en el laboratorio, el encuestador y el político pueden controlar prácticamente todo el proceso de levantamiento y análisis de la opinión pública. Y, por otra parte, nos aclara la manera en que esta intervención logra una influencia decisiva en los resultados de una encuesta. Asimismo, se plantea una reflexión por demás interesante: "el riesgo de obtener el resultado que se quiere escuchar y no el que se necesita saber te y mucho más yoría quisiera admitir llega a la conclusión encuesta se utiliza de propaganda gu- ésta no pasa de ser narciso se pierde en ción".

Palabras clave: española, fotografía,



cio público, opinión pública, encuesta spectator.

21

Es común —un lugar común— que quienes están en el medio de la política se refieran a las encuestas como "una fotografía de la opinión pública" o, con mayor audacia, como "una fotografía de la realidad". Palabras más, palabras menos, esto puede traducirse de la siguiente manera: la información que proporcionan las encuestas es válida única y exclusivamente para el momento y grupo poblacional en el que fueron levantadas, y no pueden tener otro tipo de lectura.